

05001 31 03 020 2021 00374 01

Verbal- Reivindicatorio

Demandante: Ignacio Antonio Maldonado Montoya

Demandado: Gloria Luz Taborda de Zapata y otros

Tema: REALIZA CONTROL DE LEGALIDAD, las irregularidades procesales deben ser saneadas antes de cada etapa procesal. Deber de motivación de las providencias judiciales atienen la garantía del debido proceso.



SALA SEGUNDA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, ocho de mayo de dos mil veinticuatro

Sería procedente resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente al auto del 29 de septiembre de 2023 que negó el levantamiento de las medidas cautelares proferido por el JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD; pero se advierte una irregularidad que imposibilita adelantar el recurso de alzada,

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante auto del 10 de noviembre de 2021 se admitió demanda reivindicatoria promovida por IGNACIO ANTONIO MALDONADO MONTOYA contra GLORIA LUZ TABORDA DE ZAPATA, JUAN GUILLERMO ZAPATA TABORDA, LUIS FELIPE ZAPATA TABORDA y MARI SOL ZAPATA TABORDA; previo a resolver sobre medida cautelar, ordenó prestar caución por \$143.529.321 (ver archivo 5, cuaderno principal, expediente digital).

1.2 Acreditada la caución, el 16 de diciembre de 2021 decretó *“la inscripción de la demanda sobre los bienes inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria Nos. 001-520444 y 001-1063170 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de*

Medellín, Zona Sur, denunciado como de propiedad de Juan Guillermo Zapata Taborda” y “la inscripción de la demanda sobre los bienes inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria No. 01N-308226 y 01N308229 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, denunciados como de propiedad de Luis Felipe Zapata Taborda”; mediante auto del 10 de febrero de 2022 *“la inscripción de la demanda sobre los bienes inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-285166, 001-285165, 001- 285164 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, y 01N-206493 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte; denunciados como de propiedad de Juan Guillermo Zapata Taborda.”* (ver archivos 7 y 13, cuaderno principal, expediente digital).

1.3 En providencia del 18 de mayo de 2022 se reconoció personería al Abogado que representa los intereses de los demandados a quienes se les tuvo por notificados por conducta concluyente a partir de la notificación por estados de la providencia (ver archivo 28, cuaderno principal, expediente digital).

1.4 El 1 de septiembre de 2023 la parte demandada solicitó el levantamiento de inscripción de la demanda sobre los 8 bienes objeto de medida cautelar propiedad de los demandados por ser excesiva y exagerada en atención al artículo 600 del CGP; resuelta desfavorablemente mediante providencia del día 29, mismo mes y año, *“las medidas cautelares, por disposición normativa, pueden solicitarse desde la presentación de la demanda, sin que ello presuponga un prejuzgamiento por parte del Fallador, como quiera que su práctica se da de manera preventiva y con el fin de que no se hagan ilusorias las condenas ante una eventual sentencia favorable,*

la cual tendrá lugar luego de agotarse una a una las etapas del proceso, entre ellas aquella relativa a las pruebas que sustentan lo procurado por la parte actora...si la parte demandada considera excesiva la cautela decretada, cuenta con la posibilidad de solicitar su levantamiento, empero no bajo los argumentos y disposiciones normativas erradamente citadas - artículos 599 y 600 del C.G.P., sino emprendiendo el trámite consagrado en el artículo 590 ibídem, esto es prestar caución para que se proceda de conformidad” (ver archivos 48 y 49, cuaderno principal, expediente digital).

1.5 La decisión fue recurrida porque hay actuación desbordada, agrandada en 7 veces el valor de los perjuicios civiles denunciados por la parte actora; de oficio o a solicitud de parte se puede ordenar el levantamiento, dejando los bienes que de manera calculada respondan por lo pretendido, conforme los artículos; 2, 7, 11, 12, y 13 del CGP; estamos frente a un *“proceso ordinario de reivindicación y no frente a un proceso de responsabilidad civil”*, debió el Despacho aplicar las normas procesales y la jurisprudencia en estricto sentido y *“tomarse el juicio razonado jurídicamente, sin apresuramiento, ya que el proceso era simplemente reivindicatorio y no un ordinario de reconocimiento e indemnización de perjuicios civiles”* (ver archivo 50, cuaderno principal, expediente digital).

1.6 Mediante providencia del 9 de noviembre de 2023 se requirió a la parte demandada, para que aportara el avalúo comercial de los bienes inmuebles objeto de la cautela decretada; cumplido mediante dictámenes aportados al expediente (ver archivos 50 y 55, cuaderno principal, expediente digital).

1.7 El 26 de enero de 2024 se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición, *“si bien con los avalúos arrimados pudo constatarse que los bienes objeto de la medida cautelar poseen un valor superior a*

las pretensiones de la demanda, ello no es razón suficiente para acceder a lo solicitado”; si la parte demandada pretende el levantamiento de las medidas cautelares, deberá emprender el trámite reglado en el artículo 590 del CGP; “con esta decisión no se está denegando su petición de levantamiento de medidas cautelares de manera definitiva o por improcedente, pues se avizora que le asiste razón en lo que respecta al valor de los inmuebles, no obstante, para que ello sea procedente deberá elevar la petitoria siguiendo los lineamientos consagrados en la norma citada”; concediendo el recurso de alzada (ver archivo 56, cuaderno principal, expediente digital).

2. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

¿Se esbozaron argumentos fácticos, normativos, jurisprudenciales y doctrinales para el decreto de medidas cautelares?

3. CONSIDERACIONES

Las reglas fijadas en la Ley para el impulso y resolución del proceso deben ser atendidas por las partes y por el funcionario judicial; la desatención de las formas procedimentales da lugar –en ocasiones- a la corrección de las irregularidades en las actuaciones defectuosas con base en el control de legalidad, buscando garantizar el derecho sustantivo, el derecho de defensa y de contradicción como pilares del debido proceso.

El artículo 132 del CGP prevé el control de legalidad como la posibilidad que tiene el Juez de revisar la actuación cuando en ella se avizoren

irregularidades o vicios en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 y 7 artículo 42 ibid, expresando la primera norma citada:

“Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren... irregularidades del proceso...”

Control de legalidad que tiene sustento en el bloque de constitucionalidad, como lo consagran los artículos 93 y 94; en el preámbulo, artículos 1, 2, 4, 29, 228, 229 y 230, entre otros, de la Constitución Política; artículos 1, 2 y 3, de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y artículos 1, 2, 4, 7, 11, 13, 14, 42, 139, entre otros del Código General del Proceso; para garantizar la prevalencia del derecho sustancial y el efectivo acceso a la Administración de Justicia.

Revisado el decreto y la negativa del levantamiento de las medidas cautelares objeto de controversia, encuentra esta Sala Civil la necesidad de tomar una medida de saneamiento, dados los siguientes presupuestos de derecho.

3.1 ¿Medidas cautelares en procesos declarativos?

El numeral 1 del artículo 590 del CGP prevé taxativamente las reglas que se aplicarán en los procesos declarativos para la solicitud, decreto o práctica de las medidas cautelares,

“1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u

otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes...

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual...

c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión..."

Asimismo, la Ley sustantiva en el Código Civil entre los artículos 958 y 959, consagran medidas preventivas al interior del proceso reivindicatorio.

Por tanto, para calificar las medidas cautelares decretadas al interior de este proceso y su posible levantamiento, se debió examinar a cuál o cuáles de las normativamente consagradas accedió el Juez para decretar la medida en favor de la parte demandante procediendo con la inscripción de la demanda; debiendo aplicar en estricto sentido las previstas para este tipo de procesos declarativos; es decir, si era medida nominada respecto del derecho de dominio o real principal o contractual o extracontractual o innominada o preventiva del Código Civil o la medida cautelar pedida no se ajustaba ninguna a ninguna de los supuestos normativos expuestos.

Teniendo en cuenta que las providencias emitidas por el Juez deben estar sustentadas con fundamentos fácticos, normativos, jurisprudenciales y

doctrinales conforme los numerales 5¹ y 7² del artículo 42 y 279³ del CGP, previo a resolver la apelación del auto que negó el levantamiento de medidas cautelares, se analizará si las providencias que decretaron la medida y la negativa de su levantamiento fueron motivadas para determinar la competencia del superior y evitar ingresar en vías de hecho por faltas de fundamentación.

3.2. ¿Se motivaron las decisiones?

Las providencias que decretaron y negó el levantamiento de medidas cautelares (16 de diciembre de 2021, 10 de febrero de 2022 y 29 de septiembre de 2023) carecen de sustento, fundamento y motivación, de soporte normativo, doctrinal o jurisprudencial que condujeran al decreto de la medida de inscripción de la demanda en los folios de matrículas inmobiliarias de los predios propiedad de los demandados al interior de proceso reivindicatorio o su levantamiento; no se fundamentaron ni en el numeral 1 artículo 590 del CGP, ni existe claridad si el decreto lo fue con base en los supuestos previstos en los apartados a) ó b) ó c) de la norma ni en las medidas preventivas establecidas en los artículos 958 y 959 del CC; simplemente y en forma genérica decretó la medida con fundamento en el artículo 591 del CGP sin hacer ninguna distinción y adecuación en concreto; sin tener presente que cada artículo y ordinal refiere a supuestos fácticos y normativos distintos que pueden encuadrar o no en el caso concreto.

¹ **Artículo 42. Deberes del juez** Son deberes del juez:

5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.

² 7. Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite.

³ Salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. No se podrá hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. Las citas jurisprudenciales y doctrinales se limitarán a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentación de la providencia.

El deber de motivación de las providencias judiciales se constituye en una de las garantías que consagra el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; respecto del alcance de la obligación de motivar la decisión judicial, la Corte Interamericana ha explicado que es útil para demostrar que ha existido una valoración y ponderación de los argumentos y pruebas expuestas de forma que se garantice y evidencie que la decisión es legal y no es el fruto de arbitrariedades:

“Las decisiones (judiciales) deben exponer, a través de una argumentación racional, los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión⁴”

La Corte Constitucional, en sentencia T-214 de 2012, acoge la postura instruyendo:

⁴ Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 139; Caso Yatama, supra nota 61, párr. 152; Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182, párr. 78 y Caso Tristán Donoso, supra nota 9, párr. 153; Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), supra nota 136, párr. 90, y Caso Tristán Donoso, supra nota 9, párr. 153.

“Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso. En el estado constitucional de derecho, la motivación adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho y la obligación de los jueces y operadores jurídicos de aplicar las reglas legales...reglamentarias sólo en la medida en que sean conformes con la Carta Política (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiación, interpretación conforme y carácter normativo de la Constitución) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que dé cuenta del ajuste entre su interpretación y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentación que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales.”

De igual manera, la falta de motivación de las providencias judiciales, ha sido tachada por la Corte Constitucional en sentencia T-038 de 2017, expediente T-5.724.531, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, como un requisito específico de procedibilidad de vía de hecho judicial:

“Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos son los siguientes:

...

Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.”

Por tanto, advertida la falta de motivación a cerca de la procedibilidad o no de la inscripción de la demanda decretada sobre los predios propiedad de la parte demandada como medida cautelar previa al interior de proceso reivindicatorio, que debió ser analizada teniendo en cuenta los presupuestos del numeral 1 del artículo 590 del CGP ordinal a) o del ordinal b) o del ordinal c) o de las medidas preventivas consagradas en el Código Civil; se efectúa control oficioso de legalidad, porque los fundamentos del decreto van directamente ligados, entre otros aspectos, con la decisión de levantarlas o no; y previendo el saneamiento de la irregularidad advertida, se ordenará la devolución del proceso, para que el A quo proceda a ratificar el decreto o no de la medida cautelar con base en la normativa vigente.

Efectuada la motivación fáctica, normativa, doctrinal y jurisprudencial de decretar o no la medida cautelar por parte del Juez la providencia, la providencia deberá ser notificada y puesta en conocimiento de las partes para que se pronuncien o hagan uso de los recursos de Ley; y en el evento de ser recurrida a través del recurso de apelación, el superior tendrá argumentos sobre los cuales realizar el análisis.

DECISIÓN

La SALA SEGUNDA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

05001 31 03 020 2021 00374 01

Verbal- Reivindicatorio

Demandante: Ignacio Antonio Maldonado Montoya

Demandado: Gloria Luz Taborda de Zapata y otros

Tema: REALIZA CONTROL DE LEGALIDAD, las irregularidades procesales deben ser saneadas antes de cada etapa procesal. Deber de motivación de las providencias judiciales atienen la garantía del debido proceso.

RESUELVE

Por las razones expuestas, se realiza control oficioso de legalidad sobre las providencias del 16 de diciembre de 2021, 10 de febrero de 2022 y 29 de septiembre de 2023 y previendo el saneamiento de la irregularidad advertida por falta de motivación, se ORDENA la devolución del proceso para que el A quo proceda a sustentar la decisión de continuar o no con el decreto de medidas cautelares mediante providencia que se notificará a las partes, para que puedan -si a bien lo tienen- hacer uso de los medios legales contra la decisión.

NOTIFÍQUESE POR ESTADOS ELECTRÓNICOS lo resuelto y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ
MAGISTRADO